

La contribución de la política económica y la negociación internacional a la caída del gobierno sandinista

CARLOS M. VILAS *

...los que en la historia han tratado de sobrevivir haciendo concesiones, nunca han sobrevivido.
...el único camino de la supervivencia de los procesos revolucionarios es la resistencia.

Fidel CASTRO, 1990:183.

We made our speeches; we pounded the table;
we demanded that the international community
support our cause. (...)
Well, we won; we got what we wanted.

Lawrence EAGLEBURGER, 1990.

...es obvio que esos lazos externos no son gratis, que hay un precio que la Revolución sandinista tendrá que pagar por ellos, y que recaerá ante todo en los trabajadores urbanos y rurales, vale decir en los mismos sectores que contribuyen físicamente a la lucha contra la contrarrevolución.

VILAS, 1986a:128.

EN LAS elecciones del 25 de febrero de 1990, la coalición Unión Nacional Opositora (UNO), con la fórmula presidencial Violeta Barrios de Chamorro-Virgilio Godoy, derrotó por un abultado margen de votos al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que buscaba la reelección de la fórmula Daniel Ortega-Sergio Ramírez. La UNO obtuvo casi 55% de los votos en la elección para presidente y vicepresidente, contra poco menos de 41% del FSLN y se aseguró la mayoría de la Asamblea Nacional con 51 de las 92 bancas, frente a sólo 39 del FSLN.

La derrota electoral del sandinismo frente a una coalición apoyada por el gobierno de Estados Unidos dio paso a muchas interpretaciones que

* Argentino, especializado en estudios del desarrollo. Investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM, vivió y trabajó en Nicaragua de 1980 a 1990.

NICARAGUA: RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DEL 25.2.90,
POR REGION

<i>Regiones *</i>	UNO	FSLN	Otros	Total
I Votos ¹	66 661	66 960	6 053	139 674
AN ²	4	5	—	9
II Votos ¹	126 386	105 357	9 292	241 035
AN ²	8	7	—	15
III Votos ¹	209 527	168 061	13 830	391 418
AN ²	14	11	—	25
IV Votos ¹	135 117	110 090	8 824	254 031
AN ²	8	6	—	14
V Votos ¹	97 911	35 081	6 495	139 487
AN ²	8	2	—	10
VI Votos ¹	105 020	65 499	11 025	181 544
AN ²	7	4	—	11
VII Votos ¹	19 253	15 044	5 648	39 945
AN ²	1	1	1 ^a	3
VIII Votos ¹	13 040	7 256	1 185	21 481
AN ²	1	1	—	2
IX Votos ¹	4 637	6 709	583	11 929
AN ²	—	1	—	1
Total Votos ¹	777 552	579 886	63 106	1 420 544
%	54.7	40.8	4.5	100.0
AN ²	51	39 ^b	2 ^c	92

* Región I: Estelí, Madriz y Nueva Segovia; Región II: León y Chinandega; Región III: Managua; Región IV: Carazo, Masaya, Granada, Rivas; Región V: Boaco y Chontales; Región VI: Matagalpa y Jinotega; Región VII: Región Autónoma Atlántico Norte; Región VIII: Región Autónoma Atlántico Sur; Región IX: Río San Juan.

¹ Votos válidos para presidente y vicepresidente.

² Representantes en la Asamblea Nacional.

^a Corresponde al Partido Social Cristiano (PSC).

^b A los 38 representantes se suma el candidato a presidente por haber obtenido más de 1% de la votación total.

^c Además de representante del PSC, ingresa a la Asamblea Nacional el candidato a presidente del Movimiento de Unidad Revolucionaria, por haber obtenido más de 1% de los votos.

FUENTE: República de Nicaragua, Consejo Supremo Electoral.

tratan de explicar lo inesperado. El resultado se adjudica sobre todo a las agresiones militares y económicas que el gobierno de Estados Unidos libró contra el régimen sandinista durante casi toda la década de 1980, con un efecto severo en la producción, la infraestructura, el abastecimiento, el empleo, el comercio exterior, los servicios sociales, las condiciones de vida de las masas, los miles de jóvenes muertos y mutilados. Expresiones como “el pueblo votó con las manos en alto”, “triunfó la guerra de baja intensidad”, y similares, encabezaron los análisis posteriores al 25 de febrero de 1990.

Este autor concuerda con mucho de lo que se ha señalado sobre esto —y también ha analizado otros factores que intervinieron en los resultados: la cuestión de las candidaturas, el tipo de campaña electoral conducida por el FSLN, etcétera (Vilas, 1990b)—, pero lo considera insuficiente. La guerra jugó un papel importante, pero más que directamente en el resultado de las elecciones, influyó en su efectiva configuración y en el modo en que ellas fueron encaradas por el sandinismo: como una dimensión del proceso más amplio de negociación regional que debería conducir al cese del apoyo norteamericano a la *contra* y al desarme de ésta, y a neutralizar preventivamente los argumentos del gobierno norteamericano, que negaban contenido democrático al régimen sandinista y se preparaban a desconocer un triunfo electoral que los sandinistas consideraban más allá de toda duda.

Sin embargo, la guerra contrarrevolucionaria no representó un problema electoral para el sandinismo en 1984. El FSLN ganó las elecciones de ese año con dos tercios de los votos, y lo hizo limpiamente, bajo la observación de numerosas delegaciones extranjeras, a pesar de los sacrificios que la población debía enfrentar y de las presiones externas (LASA, 1984). ¿Por qué se perdieron las elecciones de 1990, cuando la intensidad del conflicto militar era mucho menor? Hubo sin duda una acumulación de penurias y por lo tanto una acumulación de factores de desgaste, pero sería incorrecto atribuirlos exclusivamente a la guerra, sin prestar atención al modo en que ésta fue encarada por el sandinismo, y a la distribución social de las penurias.

El argumento que se desarrolla en este artículo es que la estrategia de negociación internacional aceptada por el gobierno sandinista, y las políticas económicas y sociales impulsadas desde mediados de 1988, contribuyeron de manera significativa a la derrota electoral, en un escenario de guerra contrarrevolucionaria en el cual la negociación internacional y el discurso y las políticas gubernamentales despojaron de contenido político y de clase al conflicto bélico. En estas condiciones, la idea de los años iniciales de que los sacrificios impuestos por la guerra apuntaban a la defensa de las conquistas revolucionarias, y que para ganar la guerra había que movilizar a las masas en torno a esas conquistas, y no solamente movilizar a los soldados a los frentes de batalla, dio paso a un enfoque convencional de la guerra como enfrentamiento entre dos gobiernos, sin un contenido político de masas. Empantanada la revolución en la negociación

internacional, desvirtuadas muchas de sus banderas por la política económica, la gente votó por el partido que daba mayor seguridad de paz, puesto que contaba con el respaldo explícito del contendiente más poderoso.

1. DEL CAMBIO REVOLUCIONARIO AL AJUSTE ESTRUCTURAL

El programa de transformaciones socioeconómicas del sandinismo encontró dificultades crecientes a partir de 1985 como resultado de una compleja conjugación de factores adversos que venían acumulándose desde inicios de la gestión revolucionaria: la oposición de sectores amplios de las clases propietarias y los grupos medios y la intensificación de los conflictos sociales; las presiones económicas y políticas externas y el incremento de la guerra contrarrevolucionaria; los desfases y desajustes inherentes a todo proyecto de cambio social acelerado.

La estrategia sandinista de unidad nacional y economía mixta —vale decir, de alianzas con los grupos propietarios y en primer lugar la burguesía exportadora—, fue promovida a través de políticas de subsidio crediticio y cambiario, y el mantenimiento de un bajo costo de reproducción de la fuerza de trabajo por la vía de subsidios al consumo y extensión de los servicios sociales. La transferencia de ingresos hacia los grupos propietarios y las clases medias fue encarada como una forma de premiar económicamente su decisión de mantenerse en el país y de no sumarse al apoyo abierto que el gobierno norteamericano ya estaba brindando a la guerra contrarrevolucionaria. Sin embargo, la opción sandinista no fue suficiente para motivar una respuesta económica productiva del empresariado, que mantuvo un comportamiento a la baja y, cuando pudo, continuó exportando capitales y operando con el mercado negro. El subsidio a una clase que abdicaba de manera creciente de sus funciones productivas presionó sobre las cuentas fiscales y sobre la posición de ingresos de los trabajadores. Después de los dos o tres años iniciales, el mejoramiento de las condiciones de vida de las masas, que se había apoyado ante todo en el acceso a fondos externos y a una intensa movilización popular, comenzó a deteriorarse y retroceder a medida que los fondos escaseaban y la movilización disminuía (Vilas 1985; 1986a, b y d; 1989a cap. IV).

En un contexto recesivo, el propósito de promover simultáneamente el nivel de vida popular y las ganancias empresariales estatales y privadas, fracasó. Una política de este tipo siempre tiene alcances reducidos, depende del ritmo de expansión del producto y, en economías muy abiertas, de una fluida disponibilidad de divisas. La rentabilidad capitalista cayó; con el deterioro creciente de la economía, el financiamiento de los estímulos a la inversión privada —incluidos el subsidio al consumo diferenciado y la dolarización de los ingresos— tuvo que llevarse a cabo a expensas de los ingresos del sector público y a costa de mayores reducciones de los niveles de consumo y de vida de los grupos de menores ingresos.

El antagonismo de Washington hacia el régimen sandinista condujo a una rápida escalada de agresiones económicas y financieras —bloqueo de fondos previamente aprobados y del acceso a organismos multilaterales de crédito. (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional), embargo comercial— y al público apoyo político, militar y financiero a la contrarrevolución, con un efecto extraordinario en todos los sectores de la sociedad nicaragüense. La necesidad de financiar la defensa obligó a incrementar el gasto público. El deterioro productivo por la destrucción de la infraestructura, la escasez de insumos y repuestos y los desajustes en el comercio exterior, y por la movilización militar de una porción alta de la fuerza de trabajo, aumentó el efecto inflacionario de los crecientes gastos de defensa.

La estrategia de transformación económica escogida por el sandinismo, con énfasis en grandes proyectos de inversión altamente dependientes de financiamiento y tecnología externos y de maduración en el mediano y largo plazo, al desaparecer el financiamiento externo presionó adicionalmente sobre el abastecimiento de insumos y los escasos recursos financieros disponibles, alimentando además las tensiones inflacionarias. Por su lado, el tipo de cambio subsidiado desalentaba las exportaciones pero abarataba la importación de insumos —muchos de los cuales se producían localmente—, inhibía una mayor integración productiva intersectorial de la economía e incrementaba el endeudamiento externo.¹ El enfoque tecnocrático de la estrategia, con énfasis en grandes empresas estatales, tuvo poco efecto de movilización de las masas y dejó un espacio muy reducido para la participación de los trabajadores y los campesinos. La reforma agraria, preocupada ante todo por la consolidación de las fincas estatales, promovió una lenta asignación de tierras al campesinado e impulsó sistemas de precios y mecanismos de comercialización que marginaban a los pequeños y medianos productores, y dio prioridad a estrategias de cooperativización que chocaban en lo inmediato con algunas de las demandas más profundas de muchos campesinos y de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica (Vilas 1987a; 1989 a caps. III y VI, 1989b cap. IV; Vilas, Plantinga *et al.*, 1989).

Consciente de que estas cuestiones contribuían al deterioro de las bases sociales de la revolución, especialmente entre el campesinado de las regiones norte y central, porque ampliaba el espacio de propaganda y acción militar de la contrarrevolución, el sandinismo impulsó a partir de 1985-1986 algunas reorientaciones que imprimieron a la reforma agraria un perfil menos estatista y más campesino, mejoraron las estructuras de precios, flexibilizaron los mecanismos de comercialización y prestaron más

¹ Por ejemplo, los grandes proyectos agroindustriales del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA) importaban de Europa implementos agrícolas que se producían en empresas industriales estatizadas que, por falta de demanda, debían trabajar con elevados niveles de capacidad ociosa y grandes pérdidas.

atención a la producción orientada al mercado interno; reestructuraron la estrategia de grandes inversiones públicas dando más espacio a proyectos descentralizados, en escala más reducida y más participativa, e impulsaron un proceso de diálogo con las organizaciones indígenas que culminaría con el establecimiento de un régimen de autonomía en la Costa Atlántica. Estas reorientaciones de política, que se hacían cargo de muchas de las demandas y reclamos de las poblaciones respectivas, contribuyeron significativamente a una mayor eficacia del esfuerzo de guerra y, por último, al comienzo de la derrota militar de la contrarrevolución (Vilas 1988, 1989b, cap. V).

Durante 1987, el incremento de la actividad militar y los demás factores señalados ahondaron la desarticulación de la economía. Las exportaciones permanecieron en un valor casi 50% inferior al de inicios de la década. Las actividades de especulación y mercado negro abarcaban todas las ramas de la economía; incluso dependencias del gobierno recurrían a ellas por necesidades de funcionamiento. El circuito de circulación dolarizado, que había venido ampliándose por decisiones de política desde 1985, se expandió aceleradamente alimentando las corridas sobre la divisa. Una cuarta parte de la fuerza de trabajo estaba desempleada, y otro tanto bajo las armas. La inflación alcanzó valores de cuatro dígitos y el salario real, con base 1980 = 100, llegó a un nivel de 11; el endeudamiento externo se incrementó un tercio respecto del año anterior. La falta de mantenimiento, los problemas de obsolescencia de equipos, y otros, agudizaron las limitaciones de la infraestructura: cortes de energía eléctrica, deterioro del sistema de transportes y comunicaciones, etcétera. Nicaragua ingresó en el proceso negociador de Esquipulas en condiciones de extrema vulnerabilidad económica y de relativa desmovilización de las masas, más notoria sin embargo en las ciudades que en el campo (Vilas 1989a, cap. III).

El programa de ajuste con que el sandinismo intentó enfrentar estos problemas en junio de 1988 no fue un trueno en un día de sol, sino que se venía discutiendo en el seno del gobierno por lo menos desde 1983 (Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional) y se trató de aplicar por primera vez, aunque de manera menos drástica, en febrero de 1985. Un mes después que Daniel Ortega asumió su mandato presidencial, como resultado de las elecciones de noviembre de 1984, se adoptó un programa de ajuste tendente a fortalecer los ingresos gubernamentales y reducir el déficit fiscal (véase *Barricada*, 10 de febrero de 1985). Esto se consiguió en pequeña medida, pero al precio de un incremento vertiginoso de la inflación, una mayor degradación de los abastecimientos básicos, el reforzamiento de las presiones especulativas y un deterioro más agudo de los ingresos reales de los trabajadores (Vilas 1986b y 1990a). El programa se dejó de lado ante la convicción de que sus efectos socioeconómicos en las masas podrían repercutir negativamente en el esfuerzo de guerra y minar adicionalmente las bases sociales del sandinismo. Además, la guerra

impedía reducir el principal rubro del gasto público: la defensa, que en 1986 absorbía 35.6% del presupuesto del gobierno y en 1987 el 41%.

La derrota militar de la contrarrevolución, que se hizo irreversible desde principios de 1988; la reducción del financiamiento que ella recibía del gobierno norteamericano; el avance del proceso de negociación regional a partir de Esquipulas II (agosto de 1987), y la reducción de la actividad militar luego de la firma del acuerdo de Sapoá (marzo de 1988) entre el gobierno sandinista y los *contras*, enmarcaron el lanzamiento de un nuevo y más drástico programa de ajuste a principios de junio de 1988. El gobierno sandinista entendió que ya no existían los factores extraeconómicos que habrían podido transformar el efecto social del ajuste en un deterioro de sus bases políticas. “Sin duda —señaló un editorial del diario *Barricada* al hacer un balance de la aplicación del programa—, las condiciones político-militares ahora favorecen las políticas de estabilización” (30 de enero de 1989).

Se decretó una macrodevaluación que sería continuada por otras de parecida magnitud en agosto, septiembre y diciembre, y durante 1989. Se inició una política de indexación de las tarifas de los servicios públicos y el crédito de acuerdo con la evolución del índice de precios minoristas y de la evolución de los precios centroamericanos; se aumentaron los incentivos en divisas convertibles a los exportadores; se eliminó la mayoría de los controles de precios y de comercialización, al mismo tiempo que se fortalecieron los controles sobre la masa salarial; se promovió una reducción adicional del salario real y del consumo, apelándose asimismo al sistema convencional de racionamiento a través de los precios en detrimento del sistema anterior, ya muy deteriorado e ineficiente, de racionamiento mediante cuotas. La contracción del gasto público y la reducción del empleo en el gobierno central afectaron a los servicios sociales y a los programas de desarrollo, sobre todo en las que habían sido zonas de guerra, y en la Costa Atlántica.

La paz permitió cortar los gastos de defensa; en 1989 el presupuesto del ejército se redujo en 29% y el de las fuerzas de seguridad en más de 30%. La reducción de la inversión pública se efectuó al costo de fortalecer en el corto plazo los factores recesivos de la economía, elevar los ya altos niveles de desempleo de la fuerza de trabajo, y deteriorar adicionalmente las condiciones de vida de las masas. El enorme costo social de esta estrategia fue reconocido por el gobierno sandinista, que lo juzgó una injusticia necesaria.² Se redujeron los controles económicos de los años anteriores, se apeló de manera esperanzada a los mecanismos del mercado para la reactivación de la economía y se intentó la reprivatización de algunas

² Véase la entrevista al ministro de Finanzas en *Barricada*, 6 de febrero de 1989 y el editorial de este mismo periódico: “No es justo, pero es imprescindible” del 3 de febrero de 1989; también la entrevista al ministro de Cooperación Externa y miembro de la Dirección Nacional del FSLN, donde se hace un intento de explicación marxista de la estrategia de ajuste; *Barricada*, 24 y 25 de febrero de 1989.

empresas estatales. A principios de 1989, casi 50% del personal de la Secretaría de Planificación y Presupuesto fue despedido o transferido a otras dependencias del gobierno.

En un ambiente económico de retracción casi absoluta de la inversión privada, la inversión pública se redujo en más de 66% entre 1987 y 1989, el empleo público disminuyó en unas 50 000 personas (casi 20% de la nómina del gobierno central), y la tasa abierta de desempleo llegó a 28% a principios de 1989. La eliminación de los subsidios afectó inmediatamente los precios y la estructura de costos. Apenas una semana después de iniciado el programa, el diario *Barricada* del FSLN informó, por ejemplo, de una fuerte reducción en la venta de carnes, frutas y legumbres en los mercados de Managua y de la pérdida de esos productos por la misma causa (edición del 27 de junio de 1988). Entre enero y febrero de 1989 el precio del transporte público urbano aumentó 25 veces.

La estrategia sandinista original de agroexportación y seguridad alimentaria con transformaciones socioeconómicas, fue remplazada por un enfoque convencional de agroexportación sobre la base de costos laborales comprimidos y reversión parcial de algunas de aquellas transformaciones. El enfoque adoptado en junio de 1988 y reforzado en enero de 1989 tuvo muchas de las características de la condicionalidad que el FMI y el Banco Mundial imponen a los países que solicitan sus fondos para enfrentar desajustes económicos. Lo novedoso del caso nicaragüense es que el programa fue adoptado unilateralmente por el gobierno sandinista y sin la provisión de fondos que es la contrapartida de los programas de ajuste auspiciados por esas instituciones. Si el enfoque del FMI es "fondos con condicionalidad", el enfoque sandinista fue "condicionalidad sin fondos" (Vilas 1989a, p. 112). Sin acceso a fondos líquidos externos —que la comunidad socialista no podía ofrecer—, el gobierno sandinista apeló a los programas de ajuste pensando en ellos también como llaves que abrirían las puertas de Europa occidental a divisas de libre convertibilidad (Vilas 1989c).³

La estrategia se adoptó en el marco de fuertes tendencias recesivas, y las agravó, combinando niveles crecientes de precios con niveles decrecientes de actividad: inflación monetaria y deflación real. El índice de precios al consumidor, que había crecido en 1 347% en 1987, aumentó a casi 33 000% en 1988, mientras que el PIB por habitante que había caído en 3.9% en 1986 y en 1.7% en 1987, se redujo en 12.1% en 1988; los fondos externos no llegaron. El deterioro de los salarios fue brutal, a partir de una evolución negativa que venía registrándose durante toda la década. De acuerdo con el enfoque monetario convencional, los salarios constituyen el colchón que permite operar a las políticas de estabilización y ajuste. A fines de 1988 el salario real había descendido a un nivel 5, tomando como base 1980 = 100, con un deterioro real de más de 50%

³ Sin embargo, debe señalarse que en 1986 hubo una contribución de la URSS en divisas convertibles, para el financiamiento del déficit de la balanza de pagos.

durante 1988; en algunas ramas de la industria representaba menos de 5% de los costos de producción, y en el gobierno central alrededor de 9% (APEN 1988; Pilarte *et al.*, 1988). De una manera distinta a la que imaginó Marx, el sandinismo consiguió la abolición de los salarios.

Los precios pagados a los productores de granos básicos —es decir, a los campesinos— también quedaron rezagados respecto del índice general de precios, convirtiéndose en otro colchón para la operatividad de la estrategia de ajuste. El retraso de los precios de las mercancías que esto produce, combinado con el crecimiento exponencial de los costos de producción y del crédito por las devaluaciones y la indexación de las tasas de interés, significó un deterioro fuerte de la posición de ingresos de los pequeños y medianos productores rurales, y un endeudamiento enorme. De acuerdo con un informe oficial, a principios de 1989 se pagaba en Nicaragua a productores de granos básicos los precios más bajos de Centroamérica (CIERA, 1989).⁴

El efecto de las políticas de ajuste fue también muy fuerte en la pequeña producción industrial, que con 40% de los establecimientos generaba en 1989 alrededor del 25% del producto manufacturero. El encarecimiento de los insumos, las restricciones crediticias y el alza de la tasa de interés; la abultada presión impositiva y la retracción del consumo interno, golpearon severamente al sector, que ya venía experimentando problemas serios. En la Región IV por ejemplo (departamentos de Granada, Masaya, Carazo y Rivas), de 152 cooperativas industriales registradas a principios de 1988, seguían produciendo solamente 82 en abril de 1989, y de 20 cooperativas textiles, solamente dos.

Asalariados, campesinos y pequeños productores debieron asumir el costo social de las políticas de ajuste, es decir, las que en la terminología de los años iniciales eran llamadas “fuerzas motrices” de la revolución. La recomposición de las finanzas públicas y de la rentabilidad empresarial fue subsidiada por la reducción de los ingresos de estos sectores. Es importante recordar que también fueron ellos los que soportaron los principales costos sociales de la guerra. Ellos fueron, en efecto, los grupos sociales que constituyeron el grueso de los combatientes del EPS y de la contra; los que aportaron los muertos y los heridos, los mutilados, los desplazados, los secuestrados. Y cuando la guerra terminó, debieron pagar los platos rotos.

Durante 1988, el consumo de leche se redujo en casi 50%, y el de azúcar en 40%. Enfermedades como tuberculosis y malaria se extendieron de manera notoria; la diarrea infantil incrementó su cuota de niños muertos. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Educación, 30% de la población adulta del departamento de Managua era analfabeta a fines

⁴ En entrevistas con campesinos cooperativistas de Río San Juan, en abril 1989, el autor encontró casos en que la deuda bancaria se había incrementado en el curso de cinco a seis meses entre 600% y 800% a causa de las elevadas tasas de interés y su indexación a la tasa cambio.

de 1988, al mismo tiempo que los becarios que regresaban del exterior después de cinco y seis años de estudios superiores, no encontraban trabajo por la contracción de la producción, y la Juventud Sandinista les aconsejaba que no regresaran, o que se fueran a África o al Medio Oriente. Las medicinas se apilaban en los depósitos del Ministerio de Salud porque la gente no podía comprarlas por sus precios elevados, hasta el punto de que periódicamente se regalaban las que estaban a punto de vencerse (*Barricada*, 15, 20 y 21 de febrero, y 13 y 17 de abril de 1989; *El Nuevo Diario*, 27 de abril de 1989).

2. DEL AJUSTE ECONÓMICO AL AJUSTE POLÍTICO Y SOCIAL

El mayor énfasis en los mecanismos de mercado involucró una nueva aproximación del gobierno hacia los grandes productores privados. Se ampliaron los incentivos en dólares —“erigiendo en premio la divisa del país que nos agrade”, según el comentario del presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG)—, se renovaron las garantías a la propiedad privada y se proclamó el fin de la reforma agraria. Una declaración similar se había efectuado a fines de 1984 con la finalidad de apaciguar los temores de los grandes productores después de las elecciones de noviembre de ese año. Lo novedoso ahora fue la apropiación del lenguaje de las élites por los dirigentes sandinistas: el viceministro de la Reforma Agraria anunció el fin de las “confiscaciones”, el nombre empleado por la oposición burguesa para referirse a lo que la ley de reforma agraria denomina, técnicamente, “afectaciones” (véase *Barricada*, 2 de febrero de 1989). Varias fincas que habían sido adjudicadas a cooperativas campesinas fueron entregadas por MIDINRA a grandes productores privados, y las cooperativas fueron desmanteladas o forzadas a desplazarse a tierras marginales; las protestas de la UNAG no recibieron respuesta satisfactoria del Ministerio. Durante la campaña electoral el presidente Daniel Ortega, buscando su reelección, aseguró a los terratenientes de la Región IV afectados por la reforma agraria, que “serán compensados con la devolución de sus propiedades, maquinarias y otros bienes” (*Barricada*, 14 de diciembre de 1989).⁵

La política económica estuvo rodeada de una retórica que hirió ideológicamente a los que perjudicaba económicamente, al mismo tiempo que continuaba las concesiones a los grupos acomodados. Cuando los obreros de la construcción y de la mecánica automotriz se declararon en huelga en

⁵ El caso más sorprendente fue el de la cooperativa ganadera Juan José Urbina en la Región III, cuyas tierras fueron devueltas por MIDINRA a su anterior propietario Mario Hanon, posiblemente el más grande productor de arroz de Nicaragua, quien a fines de 1980 estuvo involucrado en actividades contrarrevolucionarias. Celebrando la decisión, el señor Hanon declaró que dados los precios bajos del arroz —un ingrediente básico de la dieta nicaragüense—, iba a dedicar esas tierras a producir sandías para exportarlas a Costa Rica. Véase *El Nuevo Diario*, 1 de abril de 1989, y *Barricada*, 13 de abril de 1989.

demanda de mejoras salariales, la respuesta del gobierno fue acusarlos de estar al servicio del gobierno de Estados Unidos y lanzarles a la policía; cuando los maestros y los trabajadores de salud reclamaron mejores salarios al presidente Ortega, éste les endilgó un discurso sobre sus obligaciones morales respecto de la población y les regañó por su condición de trabajadores no productivos (*Barricada*, 18 y 19 de junio de 1988), y cuando un año después algunos sectores del magisterio declararon, por los mismos motivos, la huelga, sobrevino la usual acusación de estar al servicio de Estados Unidos y de contribuir a la espiral inflacionaria (*Barricada*, 22 de mayo de 1989). Cuando las cooperativas de producción industrial reclamaron por las altísimas tasas de interés y la carga impositiva, el ministro de Finanzas les contestó que, a menos que se ajustaran a la nueva política, muchas de esas cooperativas tendrían que “desaparecer irremediabilmente” (*Barricada*, 30 de junio de 1988), como efectivamente ocurrió.

Pero dos días después de la condena a muerte a los pequeños industriales, el “Pacto de Boaco” celebrado entre los grandes ganaderos de los departamentos de Boaco y Chontales, MIDINRA, y el Banco Nacional de Desarrollo, estableció que las deudas contraídas por los primeros quedarían al margen de la indexación y podrían ser pagadas de acuerdo con sus valores nominales (*Barricada*, 2 de julio de 1988). La ilustración más reciente de esta estrategia de distribución desigual de beneficios y sacrificios se encuentra en la asamblea del MIDINRA con empresarios, campesinos y obreros del campo en el marco de la denominada política de concertación (20 de abril de 1989), en la cual el gobierno aprobó un subsidio de un millón de córdobas por manzana (equivalente a unos 150 dólares) a los algodoneros —que no habían solicitado— y rechazó la demanda obrera de un salario que cubriera como mínimo una canasta de ocho productos básicos.

La reducción del empleo público a través de despidos masivos fue enfrentada de manera vertical y burocrática, sin participación de las organizaciones sindicales ni de los propios involucrados. Se prestó, por lo tanto, a un cúmulo de arbitrariedades e injusticias, y afectó mucho más a los trabajadores que a los funcionarios.⁶

Se reforzó asimismo el estilo particularista y de otorgar prebendas en el ejercicio del poder político: un estilo que el sandinismo no inventó y que se inscribe en lo más profundo de las tradiciones políticas nicaragüenses, pero que tampoco contribuyó a erradicar y muchas veces contribuyó a reproducir. El deterioro generalizado de las condiciones de vida de la gente hizo más notorias e irritantes las desigualdades derivadas del acceso a amistades, a posiciones en el Estado y a favores. En algunas ocasiones el gobierno administró este acceso particularista a condiciones de vida más holgadas como un medio de retener a técnicos y profesionales en el sector

⁶ Por ejemplo, en muchos casos resultaron afectadas personas que se encontraban con permiso por enfermedad, o se movilizó en el servicio militar a mujeres en uso de licencia maternal.

público, compensando los salarios increíblemente bajos. En el fondo, era como crear un mercado de valores políticos en remplazo del mercado convencional de valores económicos —fuerza de trabajo, salarios, bienes y servicios—, pero más frecuentemente se trató de la reproducción de los estilos políticos tradicionales para los cuales el ejercicio del poder conlleva el acceso a beneficios sociales y materiales. Una cuestión para cuya comprensión Max Weber resulta más útil que Marx (Vilas 1987b).⁷

El viraje de las políticas económicas creó problemas a las organizaciones populares sandinistas, que quedaron aprisionadas entre su lealtad política al FSLN, que las llevaba a justificar y defender el nuevo enfoque, y la lealtad a sus bases sociales, golpeadas por el ajuste y su distribución desigual de premios y sinsabores. El resultado fue una disminución de la capacidad de reclutamiento y movilización y una disminución de los niveles de participación populares, que algunos veníamos observando desde años anteriores (Vilas 1986c). La desmovilización popular es tanto un efecto de las políticas de ajuste cuanto una condición para su viabilidad.

En síntesis, a partir de mediados de 1988, el gobierno sandinista enfrentó una política económica que favoreció a los ricos y perjudicó a los pobres, y que además, los agredió ideológicamente, y ratificó asimismo en el discurso oficial la ausencia de un espacio legítimo para buena parte de las bases sociales del sandinismo. Con el agravante de que las concesiones hechas a los ricos, y que éstos aceptaban siempre demandando más, no alteraron su comportamiento político. En estas condiciones, las referencias a una orientación socialista del régimen sandinista, precisamente en momentos en que el viraje hacia la derecha era más notorio, resultaron ser una curiosidad semántica que conmocionó a pocos.⁸

En su afán por ganarse los votos de los empresarios y las simpatías de algunos elementos del *establishment* político norteamericano, el discurso sandinista trató de desembarazarse de las reverberaciones revolucionarias

⁷ Un ejemplo particularmente gráfico es el del administrador de una empresa estatal de la industria láctea, a quien en premio a su desempeño se le adjudicó un vehículo, pagado por la empresa, para su uso personal. Puesto que el funcionario ya era dueño de un auto, solicitó a la corporación de la cual depende la empresa que el nuevo fuera puesto a nombre de su hijo —a la sazón un muchacho de 14 años—, solicitud que fue concedida. Meses más tarde, el mismo funcionario solicitó a la corporación que, como estaba enviando a su hijo a estudiar al exterior, la empresa comprara el auto, y que la operación se efectuara en dólares, ya que como buen padre, debía proveer al mantenimiento de su hijo en el exterior, donde la moneda nicaragüense no circula. La solicitud también fue aceptada. Véase *Barricada*, 31 de enero de 1989. La situación fue denunciada por el sindicato de la firma, sin mayores resultados prácticos.

⁸ Véanse los discursos del presidente Ortega al presentar el programa de ajuste de junio de 1988 (*Barricada*, 15 de junio de 1988), en ocasión del IX aniversario de la Revolución (*Barricada*, 20 de julio de 1988); el informe a la Asamblea Nacional del 30 de enero de 1989 (*Barricada*, 31 de enero de 1989), y Ortega, 1989. El nuevo discurso oficial causó impacto en algunos sectores de la iglesia católica, que a partir de él dieron por sentado sin más el carácter socialista de la experiencia sandinista: véase IHCA, 1989; Gorostiaga, 1989.

del pasado. La guerra fue presentada como un enfrentamiento convencional entre dos Estados, despojando al conflicto de su contenido ante todo político y social. En su largo discurso a la Asamblea Nacional el 30 de enero de 1989, el presidente Ortega se refirió a la guerra como causa de la crisis económica; mencionó como antecedentes históricos a las cruzadas y a la segunda guerra mundial, omitiendo en cambio toda mención a las dos grandes guerras revolucionarias de liberación nacional del siglo xx que contribuyeron a forjar en las décadas de 1960 y 1970, las concepciones sandinistas de la guerra popular: China y Vietnam (*Barricada*, 31 de enero de 1989). Al cumplirse el décimo aniversario de la nacionalización del comercio exterior, ésta fue presentada apenas como la “nacionalización de algunos exportables” (*Barricada*, 18 de diciembre de 1989).

La nueva aproximación a los grandes empresarios fue considerada no solamente como estrategia de reactivación económica sino asimismo como una condición para acelerar el desarme y la desmovilización de la *contra* y mejorar la imagen externa del sandinismo. En el escenario internacional que comenzó a configurarse tras la salida de Ronald Reagan de la Casa Blanca, con los vientos de glasnost y perestroika soplando desde la Unión Soviética y las numerosas iniciativas y presiones de organismos internacionales y gobiernos latinoamericanos para alcanzar la paz en Centroamérica, el encuentro de presidentes centroamericanos en Costa del Sol (El Salvador) reconoció la voluntad del gobierno de Nicaragua de poner fin cuanto antes a la cuestión de los exguardias somocistas y de los grupos contrarrevolucionarios que se mantenían en campamentos en territorio de Honduras, y de “desarrollar un proceso de democratización y reconciliación nacional... en el marco de los Acuerdos de Esquipulas II”. En las condiciones concretas de Nicaragua, esto significaba mayor democratización hacia la derecha, no hacia las masas.

Un punto importante de las negociaciones en Costa del Sol fue la decisión de la diplomacia sandinista de adelantar las elecciones que debían efectuarse en noviembre de 1990, “a más tardar el 25 de febrero” de ese año. Ésta fue una cuestión en la que algunos congresistas estadounidenses del Partido Demócrata habían insistido mucho para evitar la superposición de las elecciones nicaragüenses con las que deberían celebrarse ese mismo mes en Estados Unidos; el argumento de los norteamericanos fue que sería mucho más fácil para ellos presionar por el retiro de los *contras* y por la reducción del financiamiento, y oponerse a la decisión de la Casa Blanca de renovar en mayo el embargo comercial contra Nicaragua, si para entonces los sandinistas ya habían realizado las elecciones —que de todos modos iban a ganar fácilmente. También habían presionado en favor del adelanto de las elecciones varios de los presidentes latinoamericanos y el jefe del gobierno español, participantes con Daniel Ortega en los actos de asunción de Carlos Andrés Pérez a la presidencia de Venezuela (Caracas, febrero de 1989). Se convino también en Costa del Sol la invi-

tación a observadores internacionales para el proceso electoral, la reforma a la ley de medios, y la restructuración del Consejo Supremo Electoral.

Por primera vez en la breve historia de las negociaciones de paz en Centroamérica, el documento de los cinco presidentes dejó de lado el principio de simultaneidad en el cumplimiento de los acuerdos, explícitamente establecido en Esquipulas II —vale decir, que los cinco gobiernos debían dar cumplimiento a los convenios al mismo tiempo—, y redujo la “cuestión centroamericana” a la “cuestión nicaragüense”. Una semana más tarde el presidente Ortega anunció en Managua, ante el estupor de la gente reunida en la Plaza de la Revolución, la decisión de indultar a unos 1 200 exmiembros de la Guardia Nacional somocista, que se encontraban cumpliendo condenas en cárceles de Nicaragua. A principios de 1990, en vísperas de las elecciones, se amplió el indulto a la totalidad de los exguardias nacionales y a los miembros de la contrarrevolución que purgaban condenas judiciales por violaciones a los derechos humanos.

El gobierno sandinista adoptó estas medidas después de haberse resistido a ellas durante años, y aunque las presentó ante la población como precios que había que pagar por la desmovilización de la *contra* y la paz, para mucha gente fueron pruebas de debilidad y de retroceso. En particular, la libertad concedida a los guardias somocistas subestimó el profundo antisomocismo persistente en amplios sectores de la población nicaragüense, para quienes resultaba más comprensible el indulto a un excontrarrevolucionario —que podía apelar al argumento de que había combatido al sandinismo porque éste se había convertido al “totalitarismo” o al “comunismo”, o porque la *contra* lo había secuestrado—, que el perdón a los exguardias nacionales —“la genocida”, en el lenguaje popular nicaragüense.

Lo que el sandinismo quería proyectar como imagen de fuerza y de madurez, llegaba a la gente como mensajes de debilidad y oportunismo. Lo que para el FSLN y la opinión pública internacional eran avances de democratización, para las masas eran más bien retrocesos. No en lo referente a la cuestión electoral, que de todas maneras ya estaba comprendida en la constitución, pero sí en lo referente a las concesiones del sandinismo a las fuerzas políticas de la derecha regional e internacional. Así, al tiempo que el sandinismo se presentaba como “una verdadera escuela” para América Latina (Ramírez, 1988, y de manera más elaborada Núñez & Burbach, 1987), los niveles de apatía política y desmovilización de las masas se hacían más notorias.⁹

El proceso centroamericano de negociación llevó al gobierno sandinista —y éste aceptó—, a concesiones igualmente sorprendentes en materia de política regional. En la reunión de Tela (Honduras) del 5 al 7 de agosto de 1989, el presidente Ortega se sumó a sus colegas de la región en instar

⁹ Una encuesta realizada en octubre de 1989 por el Instituto Nicaragüense de Opinión Pública (INOP) en barrios populares de Managua, reveló que 60% de los entrevistados no participaba en actividades de desarrollo comunal; otro tanto manifestó no tener interés en política.

“vehementemente al FMLN a un cese de hostilidades inmediato y efectivo, para realizar un diálogo que conlleve al abandono de la lucha armada y a la incorporación de los integrantes del FMLN a la vida institucional y democrática”, sin que similar exhortación se hiciera a la Resistencia Nicaragüense (*contras*) que mantenían su actividad militar, a pesar del cese del fuego unilateralmente declarado por el gobierno de Nicaragua. En la siguiente cumbre presidencial en San Isidro Coronado (Costa Rica), el 12 de diciembre de 1989, Daniel Ortega se adhirió al pleno respaldo de sus colegas al presidente salvadoreño Alfredo Cristiani y a la condena al FMLN y su reciente ofensiva militar; a cambio de esto obtuvo de los demás presidentes el reclamo para que la *contra* concluyera el proceso de desmovilización a más tardar el 5 de febrero de 1990. Es sabido que este reclamo no obtuvo eco ni de los contrarrevolucionarios ni del gobierno de Estados Unidos, pero el repudio al FMLN alineó a Nicaragua con las posiciones más conservadoras respecto de la cuestión salvadoreña. El documento no hizo mención alguna al bombardeo de la población civil por la aviación del gobierno salvadoreño, ni a la masacre de la dirigencia sindical de FENATRAS, ni al asesinato de los sacerdotes jesuitas, y exigió al FMLN la renuncia unilateral a las acciones militares.

La firma de Ortega de este documento causó asombro y desconcierto en amplios sectores de la población nicaragüense, e incredulidad en la oposición. La solidaridad con el proceso revolucionario salvadoreño había constituido una de las líneas más conocidas de la diplomacia sandinista y uno de los puntos de conflicto con el gobierno de Estados Unidos. La consigna “si Nicaragua venció, El Salvador vencerá” había sido coreada durante toda la década en los actos de masas y las movilizaciones populares. La primera propuesta del FDR-FMLN para el establecimiento de negociaciones directas con la entonces Junta de Gobierno de El Salvador, había sido leída ante la Asamblea General de la ONU en octubre de 1981 por el comandante Daniel Ortega. Para varios dirigentes del FSLN, la firma de la declaración de San Isidro representó abandonar al FMLN en medio de la lucha, y obligó a Daniel Ortega y al ministro de Defensa Humberto Ortega a una extensa justificación de las razones por las cuales se firmó el documento (*Barricada*, 20 y 21 de diciembre de 1989).¹⁰

¹⁰ El FMLN rechazó “con indignación” el documento, mientras que la URNG guatemalteca expresó su “insatisfacción, preocupación y sorpresa”. Véase respectivamente *Crónica* (Managua), núm. 57 (14-20 de diciembre de 1989) y *El Nuevo Diario*, 30 de diciembre de 1989. En cambio, la URSS expresó su satisfacción: *Barricada*, 14 de diciembre de 1989. La firma de Daniel Ortega en la declaración de presidentes centroamericanos en Montelimar, en las postrimerías de su mandato (3 de abril de 1990), que decidió “invitar fraternalmente al Gobierno de Panamá a participar en forma activa en los procesos de diálogo, negociación y concertación” centroamericana —vale decir, al gobierno impuesto por la invasión militar norteamericana a Panamá, tras bombardeos masivos a la población civil de ese país— fue otro regalo de la diplomacia nicaragüense a la línea más pro norteamericana en la política regional.

Como agravante, las sucesivas concesiones de la diplomacia sandinista en el proceso de negociación regional fueron ineficaces para lograr el desarme y desmovilización de la *contra*. El "plan conjunto para la desmovilización, reubicación o repatriación voluntarias en Nicaragua y en terceros países de los miembros de la Resistencia Nicaragüense y de sus familiares", que de acuerdo con el documento presidencial de Costa del Sol debería elaborarse en un plazo máximo de 90 días, cayó en saco roto, a pesar de las concesiones ya referidas del gobierno nicaragüense. De acuerdo con el plan aprobado por los presidentes en Tela, la desmovilización, reubicación y repatriación voluntaria de la Resistencia Nicaragüense debía cumplirse completamente a más tardar el 5 de diciembre de 1989, cosa que no ocurrió. En la reunión de San Isidro Coronado esa fecha se extendió al 5 de febrero, pero tampoco se cumplió.

Habría sido difícil que las cosas ocurrieran de otra manera, en la medida en que la desmovilización de la *contra* no dependía obviamente de la voluntad de los gobiernos centroamericanos, ni de las concesiones unilaterales del gobierno sandinista en materia de política interna y de política regional, sino ante todo de la voluntad política del gobierno de Estados Unidos. Una circunstancia que siempre estuvo presente en el discurso político del sandinismo, pero que no se tradujo en acciones concretas ni previno el otorgamiento de las ya referidas concesiones.

Por añadidura, el calendario de las políticas referidas a la negociación regional y el proceso electoral dificultó el calendario de las políticas de ajuste. Cuando se inició el primer programa de ajuste en junio de 1988, se esperaba contar con un margen de al menos dos años antes del inicio de la campaña para las elecciones originalmente fijadas para noviembre de 1990. Se creía que después del efecto negativo inicial, se podría disponer de un año antes de las elecciones para recuperar mínimamente los niveles de vida de la población mediante una reactivación de la producción y el empleo, y pavimentar el camino hacia otros seis años de gobierno. Pero el adelanto del calendario electoral casi un año por las razones ya señaladas, redujo ese tiempo a casi la mitad y dejó a los tecnócratas de la economía en el infierno del corto plazo sin las esperanzas del mediano plazo.

Los tiempos del giro a la derecha en economía chocaron con los tiempos del giro a la derecha en política interna y regional, y este conflicto hizo imposible la recomposición, de todos modos problemática, del campo popular en vísperas de las elecciones: precios libres y estómagos vacíos no son buenos argumentos para ganar votos en favor de un gobierno. Las victorias antiinflacionarias y estabilizadoras que el sandinismo enarbó a principios de 1990 —reducción de las brechas externas, la hiperinflación (de más de 33 000% en 1988 a algo menos de 1 700% en 1989) y el déficit fiscal (de 25% del PIB en 1988 a casi 5% en 1989), y un pequeño aumento de las exportaciones—, significaron poco para una población que tuvo que pagar esos éxitos con un agudo deterioro de sus condiciones de vida y un 35% de desempleo y subempleo. Las promesas electorales del

sandinismo de que "todo será mejor", según rezaba la consigna de las aspiraciones releccionistas de Daniel Ortega, chocaron contra los efectos de las políticas que llevaban a la gente a pensar que nada podría ser peor.

3. ¿HABÍA ALTERNATIVAS?

El efecto desastroso de las políticas de ajuste en las condiciones de vida de las masas; su efecto desestabilizador para los gobiernos que las promueven, y su muy reducida eficacia para alcanzar las metas que se proponen, son de sobra conocidos. ¿Por qué entonces el sandinismo recurrió a ellas, cuando además era evidente que esas políticas chocaban con las orientaciones de la mayoría de las metas revolucionarias? La explicación oficial plantea que no había alternativas, que la desarticulación económica era de tal magnitud que no hubo más remedio que apelar a estas soluciones dolorosas: el pueblo sabría comprender.

La existencia de alternativas a una estrategia económica dada es una cuestión política y no solamente técnica. Además, cada decisión que se toma en un sentido cierra o reduce las alternativas que estaban abiertas para tomar decisiones en otro sentido, o las hace más difíciles. A fines de 1989, eran pocas las alternativas que existían al programa de ajuste, mientras que a mediados de 1988 las posibilidades eran más amplias, y en 1985 todavía mayores.

En lo que toca a la guerra, es claro que no había alternativas. El enfrentamiento de Estados Unidos con la revolución fue decidido por el gobierno de Estados Unidos, no por el de Nicaragua; tampoco hubo alternativas al terrible efecto de la guerra. Pero había alternativas en el modo de enfrentar la guerra, en el diseño de las políticas económicas y sociales, en los estilos de relación con las organizaciones de masas, y en las modalidades de trabajo de éstas. Y lo mismo debe decirse en torno a la estrategia macroeconómica de transformación y desarrollo. La estrategia de grandes inversiones estatales fuertemente dependientes de insumos importados y financiamiento externo, de maduración en el mediano y largo plazo, no consideró la hipótesis de una guerra contrarrevolucionaria ni el deterioro del sector externo —dos situaciones recurrentes en todos los procesos revolucionarios del siglo xx (Vilas 1988). Con la guerra, los proyectos se vinieron abajo y la unidad nacional multclasista empezó a incrementar los subsidios que nutrían la permanencia de los exportadores y otros grupos propietarios, a costa obviamente de mayores presiones sobre las condiciones de vida de los trabajadores.

El sandinismo se enfrentó con una situación frecuente en política: las alianzas que en determinado momento permiten avanzar, en otro momento se convierten en obstáculos. Pero frente a esto, caben al menos dos opciones: romper los viejos acuerdos para superar los obstáculos y seguir adelante, o insistir en aquéllos con un costo social y político creciente,

arriesgándose al empantanamiento del proceso. Cuba es un buen ejemplo de la primera de las opciones (Vilas 1989a). El gobierno de Daniel Ortega, en cambio, optó por la segunda, apostando a que el mantenimiento de las alianzas iniciales, e incluso su mayor ampliación, permitiría arribar al fin del conflicto, reanudar el financiamiento externo y reiniciar el proceso de transformación. Esto revela que en determinado momento también existió la posibilidad de optar por una de las dos maneras básicas de enfrentar la guerra: como un escenario definido por el imperialismo que puede ser convertido en un insumo para el avance revolucionario, o como un obstáculo que hay que desmontar para que, una vez alcanzada la paz, la revolución sea posible. Después de algunas idas y vueltas, el sandinismo optó por el segundo enfoque (Wheelock, 1983; Tirado López, 1985).

El predominio de estos enfoques dentro del gobierno sandinista tiene que ver con el carácter pluriclasista del FSLN y con el peso creciente que sus elementos más ligados a las clases medias y a las fracciones antisomocistas de la burguesía conservadora, fueron adquiriendo en la conducción del gobierno durante la década de 1980. Esto se expresó en una primacía de los aparatos del Estado sobre el partido, de tal manera que con frecuencia funcionarios gubernamentales de menor nivel político partidario imponían sus decisiones, a pesar de criterios opuestos de dirigentes sandinistas de mayor nivel. A pesar de todas las trivialidades escritas acerca de una presunta subordinación del Estado al partido, en la Nicaragua sandinista el Estado, más que el partido, era la fuente del poder.¹¹

No se trata de una cuestión nueva. La lucha contra Somoza movilizó a amplios grupos sociales a los que afectó de manera negativa la modernización capitalista promovida por el somocismo: campesinos en vías de proletarianización, agricultores de la frontera agrícola, asalariados urbanos, pequeña burguesía. Pero también se sumaron segmentos de las clases más tradicionales, amenazados por la "competencia desleal" del Estado y marginados de la modernización capitalista (Vilas, 1984); muchos de sus hijos ingresaron al FSLN, y arrastraron tras de sí a sus padres. Desde el principio estos elementos figuraron de manera prominente y abundante en los elencos del gobierno; lograron suspender la aplicación de los decretos 3 y 38 de la Junta de Gobierno que ordenaban la confiscación de las propiedades del somocismo; diseñaron el enfoque desarrollista estatista de los años iniciales de la Revolución, y el frustrado intento de ajuste de 1985, y consiguieron mantener canales de diálogo y de negociación con sectores del *establishment* político estadounidense. La historia de las políticas sandinistas es en buena medida la historia de las pugnas internas entre estos

¹¹ Una ilustración de esto es el reportaje al comandante de la Revolución Luis Carrión Cruz, miembro de la Dirección Nacional del FSLN, donde reconoce su incapacidad como ministro de Economía e Industria para modificar las políticas de créditos e impuesto definidas desde la Secretaría de Planificación, el Banco Central y el Ministerio de Finanzas —a cuyo frente se encontraban funcionarios de menor nivel partidario— que llevaban a la ruina a la industria nacional. Véase *Barricada*, 3 de mayo de 1989.

sectores tecnocráticos emergentes de las familias más tradicionales de Nicaragua, y las iniciativas emanadas de orientaciones más próximas a las demandas del campesinado, los asalariados del campo y la ciudad, la pequeña burguesía, que pretendían consolidar las alianzas con estos grupos como forma de avanzar el proceso revolucionario a partir del escenario de guerra impuesto por la Casa Blanca, y más interesados en forjar alianzas con Europa oriental y occidental.

Con los enfoques de la relación clases/guerra y de la relación guerra/transformaciones revolucionarias predominantes en 1988, no era mucho lo que se podía hacer en términos de un enfoque alternativo de política económica. Por lo menos desde 1985 —vale decir, bastante antes de la crisis del bloque socialista europeo—, el sandinismo optó por privilegiar las buenas relaciones con la comunidad internacional occidental para neutralizar las presiones del gobierno de Estados Unidos, pero sin una conciencia clara del precio que usualmente debe pagarse por ello en términos de reducir el ritmo y la intensidad de las transformaciones revolucionarias —una cuestión que este autor señaló hace años (Vilas, 1986a).

Por lo tanto, es correcto hablar de “falta de alternativas” a las políticas de ajuste, si por ello se entiende que, a mediados de 1988, las cartas ya estaban echadas en el terreno político a causa de las rigideces creadas por las decisiones previas, pero es equivocado si se quiere significar que no existían otras formas de enfrentar la recomposición de la economía. Existían otras formas, menos gravosas para el campesinado y los asalariados del campo y la ciudad. A esta altura del desarrollo de los acontecimientos, habría sido una alternativa económica de un gran costo político en términos de las alianzas básicas del sandinismo, aunque seguramente no tan alto como el que pagó el 25 de febrero.¹²

Solamente un abismal aislamiento de las masas puede explicar que los sandinistas pensaran que con esa política económica, y en esas condiciones, podía irles mejor que a Raúl Alfonsín en Argentina o a Salvador Jorge Blanco en República Dominicana. No hubo en Nicaragua un “managuazo” equivalente al “caracazo” venezolano, pero hubo un “electorazo”: la gente votó contra el FSLN y lo sacó del gobierno.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Hacia principios de 1990, para una parte importante de la población nicaragüense que en años anteriores había apoyado o mirado con simpatía al sandinismo, no era mucho lo que quedaba de revolución: una política exterior que viraba hacia la derecha sin por ello conseguir la desmovilización de la *contra* ni sensibilizar a la comunidad financiera internacional; la libertad de los militares somocistas; la política económica de concesiones

¹² Un desarrollo de este tema excede los alcances de este artículo. Una presentación sucinta puede verse en Vilas, 1989d; también APEN, 1988.

a los grupos dominantes y deterioro de las de por sí degradadas condiciones de vida de las masas; retrocesos en materia de reforma agraria, salud y educación; endeudamiento del campesinado; inflación y desempleo. Un sandinismo que denunciaba la presencia de somocistas dentro de la Unión Nacional Opositora (UNO), pero que al mismo tiempo creaba las condiciones institucionales para esa presencia y, para ganar los votos de la derecha y mejorar la imagen internacional, llevaba a cabo anticipadamente las reivindicaciones planteadas al respecto por la UNO —ante todo la libertad de los somocistas condenados por crímenes y violaciones a los derechos humanos. Y frente a todo esto, el gobierno de Estados Unidos, que mantenía inalterada su retórica agresiva, prolongaba año tras año el embargo económico, bloqueaba la desmovilización de la *contra*, y apoyaba abiertamente la candidatura antisandinista de doña Violeta Barrios de Chamorro, que prometía la abolición inmediata del servicio militar y anunciaba un programa económico que en los papeles no lucía peor que el que Daniel Ortega estaba ejecutando.

La incapacidad de la revolución sandinista para avanzar por encima de los límites de su etapa inicial de alianza amplia de grupos y clases sociales, hizo más visibles sus limitaciones ulteriores, los compromisos contraídos con la derecha y con la comunidad internacional, el fortalecimiento de los estilos políticos tradicionales de otorgamiento de prebendas y burocráticos, y el peso creciente en las decisiones del gobierno y del FSLN, de sus elementos más ligados a los grupos medios y empresariales; factores todos que desorientaban a las bases sin garantizar la lealtad de las élites ni la benevolencia del gobierno de Estados Unidos.

Para algunos, los sandinistas estaban deshaciendo lo que hicieron al principio de la Revolución; para otros, estaban recomponiendo tardíamente lo que destruyeron. Estas idas y vueltas desde afuera y desde arriba de las masas, que eran las perdedoras netas del juego sandinista, alimentaron el voto del domingo 25 de febrero. No es la primera vez en la historia de la Revolución, que la gente hace sentir su rechazo a lo que estima como retrocesos y errores del gobierno, virándose hacia sus enemigos e incluso colaborando con los *contras*. Lo hicieron los campesinos de Jinotega y de Matagalpa a mediados de los años ochenta y los indios y los creoles de la Costa Atlántica. Entonces, el sandinismo captó el mensaje y reorientó sus políticas en el sentido de las demandas populares.

En 1990, la *contra* estaba militarmente derrotada y su dirigencia política incorporada al proceso electoral; todo el mundo estaba harto de guerra y de violencia, y las grandes movilizaciones en nombre de la revolución popular pertenecían al pasado. En las elecciones de 1984, los nicaragüenses eligieron entre la revolución y la contrarrevolución. En las elecciones de 1990 se eligió entre la continuidad de un régimen cuyas resonancias revolucionarias pertenecían casi enteramente al pasado, y las promesas de cambio emergentes de lo desconocido.

A medida que se desarrollaba la negociación internacional, que la

contra no se desmovilizaba, y que la crisis económica se profundizaba, la opinión pública internacional fue siendo erigida por el gobierno sandinista en su interlocutor principal, desplazando a las opiniones, las iniciativas y demandas de las masas. Una opinión pública internacional que en términos concretos estaba integrada por las fuerzas políticas conservadoras de Centroamérica; por gobiernos europeos sin interés alguno en deteriorar sus relaciones con Estados Unidos por culpa de los sandinistas; por elementos de la política norteamericana preocupados ante todo por su propia fortuna electoral, y por los entusiastas pero políticamente intransigentes grupos de solidaridad. Todos empeñados —con la posible excepción de estos últimos— en convencer a los sandinistas de los beneficios de una democratización entendida como menos revolución, no como más participación.

La estrategia de negociación internacional para sobrevivir a la guerra y sus efectos, la recomposición de las alianzas internas y la proyección de una imagen más grata a los interlocutores externos, tuvieron así como precio la desaceleración de la Revolución, la inversión de sus políticas económicas y la reversión de muchas de sus conquistas sociales y políticas. En los tramos finales de la campaña electoral, la competencia por los votos de las clases medias y los grupos propietarios difundió en las masas la imagen de un sandinismo que prometía cualquier tipo de concesiones hacia la derecha y hacia afuera como forma de mantenerse en el ejercicio del gobierno, pero sin poder garantizar, a cambio de esas condiciones, el desarme de la *contra* o una mejoría económica. Con la *contra* militarmente derrotada, pero sin capacidad para desmantelarla, el sandinismo optó por enfrentarse al gobierno de Estados Unidos apelando a una estrategia de “menos revolución” que le permitió ganar el aplauso alborozado de sus enemigos, y perder el gobierno por el repudio electoral de una parte importante de su pueblo.

BIBLIOGRAFÍA

- Asociación de Profesionales de la Economía Nicaragüense, *Breve evaluación de las políticas de 1988 y propuesta para 1989*, Managua, diciembre, 1988 (mimeografiado).
- Castro, Fidel, “Comparecencia para informar al pueblo sobre su visita a Brasil, Ciudad de La Habana, 23 de marzo”, en *Fidel en Brasil. Selección de intervenciones*, La Habana, Editora Política, 1990.
- Centro de Investigaciones y Estudios de la Reforma Agraria, *Situación de los precios relativos en la producción campesina*, Managua, febrero, 1989 (mimeografiado).
- Eagleburger, Lawrence, *US Assistance to Panamá, Nicaragua. Statement by Deputy Secretary before the Foreign Operations Subcommittee of*

- the Senate Appropriations Committee*, Washington D. C., US Department of State, Bureau of Public Affairs, Washington D. C., marzo, 1990.
- Gorostiaga, Xavier, "Legados, retos y perspectivas del sandinismo, 1979-1989", *Nueva Sociedad*, núm. 104 (noviembre-diciembre de 1989), pp. 24-38.
- Instituto Histórico Centroamericano, "¿Hacia dónde vamos?", *Envío*, edición especial para el décimo aniversario de la Revolución Sandinista, julio, 1989, pp. 1-51.
- Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, *Lineamientos de política económica 1983-1985*, Managua, 1983.
- Latin American Studies Association, *The Electoral Process in Nicaragua: Domestic and International Influences*, LASA, noviembre, 1984.
- Núñez, Orlando y Roger Burbach, *Revolución y democracia en las Américas*, Editorial Vanguardia, Managua, 1987.
- Ortega, Daniel, "Construyendo el socialismo nica", entrevista en *Pensamiento Propio*, julio, 1989.
- Pilarte, René et al., "Reforma económica: Hacia nuevas contradicciones", *Boletín Socioeconómico de INIES*, núm. 9 (septiembre-octubre), 1988, pp. 2-12.
- Ramírez, Sergio, "Habrá elecciones aunque no haya paz", entrevista en *Pensamiento Propio*, núm. 52 (julio-agosto), 1988, pp. 5-9.
- Tirado López, Víctor, *La primera gran conquista: La toma del poder político*, Ediciones de la CST, Managua, 1985.
- Vilas, Carlos M., *Perfiles de la revolución sandinista*, Casa de las Américas, La Habana, 1984.
- Vilas, Carlos M., "Unidad nacional y contradicciones sociales en una economía mixta: Nicaragua 1979-1984", en Richard Harris y Carlos M. Vilas (comps.), *La revolución en Nicaragua*, Ediciones ERA, México, 1985, pp. 17-50.
- Vilas, Carlos M., "Nicaragua: The fifth year, transformations and tensions in the economy", en *Capital & Class*, núm. 28, 1986a, pp. 105-138.
- Vilas, Carlos M., "Sobre la estrategia económica de la Revolución sandinista", en *Desarrollo Económico*, núm. 101 (abril-junio), 1986b, pp. 121-142.
- Vilas, Carlos M., "The Mass Organizations in Nicaragua: The Current Problematic and Perspectives for the Future", en *Monthly Review*, núm. 38 (6), noviembre, 1986c, pp. 20-31.
- Vilas, Carlos M., "El impacto de la transición revolucionaria en las clases populares: La clase obrera en la Revolución sandinista", en *Cuadernos Políticos*, núm. 48 (octubre-diciembre), 1986, pp. 92-114.
- Vilas, Carlos M., "Troubles Everywhere: An Economic Perspective on the Sandinista Revolution", en Rose Spalding (ed.), *The Political Economy of Revolutionary Nicaragua*, Allen & Unwin, 1987a, Boston, pp. 233-246.
- Vilas, Carlos M., "¿Socialismo en Nicaragua?", en *Nueva Sociedad*, núm. 91, (septiembre-octubre), 1987b, pp. 159-175.

- Vilas, Carlos M., "War and Revolution in Nicaragua", en Ralph Miliband, Leo Panitch y John Saville, *Socialist Register*, Merlin Press, Londres, 1988, pp. 182-219.
- Vilas, Carlos M., *Transición desde el subdesarrollo*, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1989a.
- Vilas, Carlos M., *State, Class and Ethnicity in Nicaragua*, Boulder Co. & London: Lynne Reinner Publishers, 1989b.
- Vilas, Carlos M., "Crisis, ajuste y perspectivas de reactivación económica en Nicaragua", en *Polémica* (segunda época), núm. 9 (septiembre-diciembre), 1989c, pp. 22-31.
- Vilas, Carlos M., *Nicaragua: Marco macroeconómico y político*, The Hague: Institute of Social Studies Advisory Service, 1990a, (mimeografiado).
- Vilas, Carlos M., "Especulaciones sobre una sorpresa: Las elecciones en Nicaragua", en *América Latina a la hora de las elecciones*, Instituto Mora, México, 1990b.
- Vilas, Carlos M., Jan Plantinga *et al.*, *Cooperativas de producción en la Región II. Del acceso a la tierra a la eficiencia económica*, Departamento de Economía Agrícola de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, 1989.
- Wheelock, Jaime, *El gran desafío*, Editorial Nueva Nicaragua, Managua, 1983.